

EL ERARIO

Revista Cuatrimestral



RECUPERANDO EL PATRIMONIO DEL ESTADO

El Erario

Revista Cuatrimestral
Año 2021, No.1, enero 2021

Consejo Editorial

H.S. Andrés A. Mojica García de Paredes
Presidente del Consejo Editorial

H.S. Arianis Esther González Murcia
Secretaría del Consejo Editorial

H.S. Joel Alexis De León Quintero
Consejo Editorial

H.S. Abdiel Castrellón Williams
Consejo Editorial

H.S. Luján González
Consejo Editorial

H.S. Dionisia Mercedes Barrios Pérez
Suplente del Consejo Editorial

H.S. Algis Bultrón
Suplente del Consejo Editorial

H.S. Xochilt Castillo
Suplente del Consejo Editorial

H.S. Emmanuel Urriola
Suplente del Consejo Editorial

La Revista Jurídica "El Erario" es producida y editada por el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Académico y aprobada por el Consejo Editorial de la Fiscalía General de Cuentas de la República de Panamá. Teléfono: (507) 506-2071 - Email: consejoeditorial@fiscaliadecuentas.gob.pa Sitio Web: www.fiscaliadecuentas.gob.pa

El Erario

Revista Cuatrimestral

Dr. Rigoberto González Montenegro

Procurador de la Administración

Dra. Irasema Tijerino

Universidad Marítima Internacional de Panamá

CFCs. Gerineldo Sousa Melo

Consultor Internacional

Ing. Víctor Antonio Acosta Guillén

Profesor y Experto en Entornos Virtuales

Alba Cristina Goti

Estudiante de Derecho y Ciencias Políticas

Nota Editorial



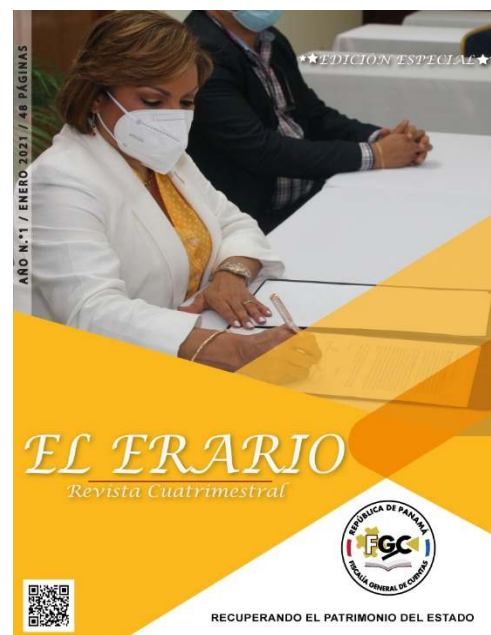
I Consejo Editorial de la Fiscalía General de Cuentas, lanza su primera y especial edición de la nueva revista jurídica El Erario, cuyo contenido hace honor al esfuerzo de ser productivos, escolásticos y creativos en el marco del binomio tecnología y educación en época de pandemia a razón del Covid-19.

La producción literaria recogida en esta ventana del conocimiento es muestra fehaciente del espíritu de lucha que debe reinar en la nueva normalidad, que nos ha tocado tener como escenario mundial y nacional.

El aporte de reconocidos juristas, servidores públicos de la Jurisdicción de Cuentas y estudiantes de derecho han engalanado la presente publicación con planteamientos doctrinales que representarán temas de consulta obligada, para quienes requieren y desean conocer más a profundidad de esta novedosa jurisdicción, cuya misión y visión es recuperar los dineros del Estado mal habidos y devolverlos precisamente al erario.

El Consejo Editorial exhorta a todos los lectores, estudiantes de derecho y profesionales de las carreras afines a unirse al selecto grupo de colaboradores que, en conjunto con nosotros, irán abriendo el camino hacia la constante publicación de tan importante revista especializada.

Gracias a todos los que han hecho posible este importante proyecto académico del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Académico de la Fiscalía General de Cuentas, liderado por la Fiscal Waleska R. Hornechea B.



RESEÑA DE LA PORTADA

Título: Firma del Convenio de Cooperación entre la Universidad Especializada de las Américas y la Fiscalía General de Cuentas.

Foto: Fiscalía General de Cuentas.

Fecha: 2 de octubre de 2020.

Técnica: Fotografía.

Andrés A. Mojica García de Paredes

Presidente del Consejo Editorial de la Fiscalía General de Cuentas

Mensaje de la Fiscal General de Cuentas



El vital proceso de enseñanza y aprendizaje es parte ineludible de nuestras responsabilidades institucionales y un serio compromiso con la comunidad en general, toda vez que educar es prevenir conductas que puedan atentar con el obligado buen uso de los fondos públicos.

La batalla sin cuartel contra la corrupción es deber de todos, para lo cual debemos estar ilustrados y al corriente del devenir de las ciencias jurídicas y su avance

legislativo, doctrinal y jurisprudencial en la materia; por tanto, la Fiscalía General de Cuentas ha dado a luz un espacio literario de corte académico, para el intercambio de conocimientos referentes a una jurisdicción con matices de especialidad y aún en proceso de desarrollo y consolidación normativa.

Estos tiempos difíciles deben ser transformados en puentes de oro, para alcanzar una visión dinámica y vanguardista en todos los ámbitos de la vida profesional y personal de los que estamos llamados a ejercer funciones públicas; esta nueva normalidad a razón del Covid-19 ha demostrado que el trabajo en equipo, las comunicaciones telemáticas, la armónica colaboración interinstitucional y el aprendizaje constante será la clave, para solventar cualquier obstáculo presente o futuro.

Enhorabuena al Consejo Editorial, al Instituto de Formación y Perfeccionamiento Académico y a todos los servidores públicos de la Fiscalía General de Cuentas que han contribuido, con un alto sentido de responsabilidad y la sinergia que este emprendimiento demanda, para lograr materializar otra de las metas trazadas, para el fortalecimiento del recurso humano técnico y especializado y, por tanto, de la investigación de afectación patrimonial, razón de ser de nuestra institución.

Nos sumamos a las festividades de un año nuevo, para enviar un fraternal deseo de reflexión y anhelo de un devenir próspero en salud y metas por cumplir, inmersos en una atmósfera plétórica de esperanza y fe en unión familiar y labor guerrera en pro de la Patria que nos demanda un servicio público constante con transparencia y dedicación.

Waleska R. Hormechea Beluche
Fiscal General de Cuentas

Mensaje del Presidente del Consejo Editorial

*L*a Fiscal General de Cuentas, Waleska R. Hormechea B., en su clara visión de redirigir la sagrada función pública de investigar las posibles lesiones patrimoniales en que incurran los agentes y empleados de manejo, ha cimentado un escenario literario que dará cuenta sobre los contenidos normativos, alcances y proyecciones de una jurisdicción que por demás se encuentra en plena evolución doctrinal, jurisprudencial y legislativa.

Con claros y arraigados matices interdisciplinarios, en la Jurisdicción de Cuentas convergen áreas del conocimiento que como un péndulo se mueven entre el derecho en materias varias tanto sustantivas como adjetivas o procesales y las ciencias de la auditoría forense, la investigación y la especialidad jurídica.

No cabe duda alguna, que la Revista El Erario se convertirá en un espacio en donde ensayos, artículos, resúmenes, glosas, conferencias, entrevistas y demás expresiones escritas y orales del conocimiento nos permitirán robustecer nuestro saber sobre la Jurisdicción de Cuentas en todas sus fases y etapas procesales.

La revista jurídica que hoy presentamos es una prueba fehaciente e inequívoca que el trabajo en equipo siempre será exitoso si es liderado por un Consejo Editorial que, de la mano del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Académico de la Fiscalía General de Cuentas, han sumado, con el fin de fortalecer, las competencias, habilidades y destrezas de los funcionarios que integran la institución.

Sean estas últimas líneas idóneas para expresar nuestro sentido y sincero agradecimiento por la confianza dispensada al suscrito, para dirigir la Revista El Erario.

Enhorabuena a todos los que han hecho posible la materialización de este proyecto institucional, que dejará huellas indelebles en el quehacer del derecho patrio.

Andrés H. Mojica García de Paredes

Presidente del Consejo Editorial de la Fiscalía General de Cuentas

El control de convencionalidad mecanismo de tutela de los derechos humanos

Dr. Rigoberto González Montenegro

12

La transparencia en la gestión pública

Dra. Irasema Tijerino

19

Rol de la Fiscalía General de Cuentas en la administración efectiva del buen manejo de fondos públicos

CFCS. Gerineldo Sousa Melo

25

La educación virtual aplicada en la Fiscalía General de Cuentas de Panamá

Ing. Víctor Antonio Acosta Guillén

32

Los particulares frente al proceso de cuentas ¿Cuál es el alcance de la Jurisdicción de Cuentas a los particulares?

Alba Cristina Goti

35



*De Centro de Capacitación a
Instituto de Formación y
Perfeccionamiento Académico*

De Centro de Capacitación a Instituto de Formación y Perfeccionamiento Académico de la Fiscalía General de Cuentas, una evolución imperante e ineludible



El Texto Único del Reglamento Interno de la Fiscalía General de Cuentas dispone que la misma brindará oportunidades de formación y desarrollo a los servidores públicos a través de la capacitación interna o externa, nacional e internacional, conforme a las necesidades detectadas, según criterio de selección y procedimientos establecidos, como, a su vez, que todos los servidores públicos de esta institución tendrán derecho a ser capacitados y adiestrados, el presente mandato reglamentario generó que la Fiscal General de Cuentas Waleska R. Hormechea B., incorporara en el Plan Estratégico Institucional en las Líneas de Acción del Pilar 4, referente al Fortalecimiento del Recurso Humano Técnico y Especializado, el crear un Centro de Capacitación de esta entidad de investigación de la afectación patrimonial, lo que materializó a través de la Resolución N.º FGC-048 de 7 de julio de 2020, ordenando, de igual forma, su reglamentación.

A razón de la exitosa puesta en ejecución del Diplomado de Formador de Formadores para la Investigación y Juzgamiento en la Jurisdicción de Cuentas avalado por la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS), quedó evidenciado la extensión y radio de acción de los programas académicos que impartiría el Centro de Capacitación por lo que se hizo necesario su redenominación a fin de robustecer su competitividad y los planes académicos que imparte, tanto a los servidores públicos de la Fiscalía General de Cuentas como aquellos que integran la jurisdicción de cuentas y las instancias que directa e indirectamente inciden en el proceso de investigación y juzgamiento de la afectación patrimonial del Estado.

Emerge, en consecuencia, a la vida jurídica, la Resolución N.º FGC-073-20 de 12 de noviembre de 2020, suscrita por la Fiscal General de Cuentas, Waleska R. Hormechea B. y el Secretario General, Andrés Mojica, denominando al Centro de Capacitación como Instituto de Formación y Perfeccionamiento Académico y aprobando su reglamento interno.

Este reglamento interno le asigna funciones al Instituto de planificar programas educativos, elaborar mallas curriculares, evaluar el impacto de la oferta académica y dar seguimiento a los convenios interinstitucionales, tanto de carácter nacional, como internacional, entre muchas funciones propias de una instancia académica institucional de alto nivel.

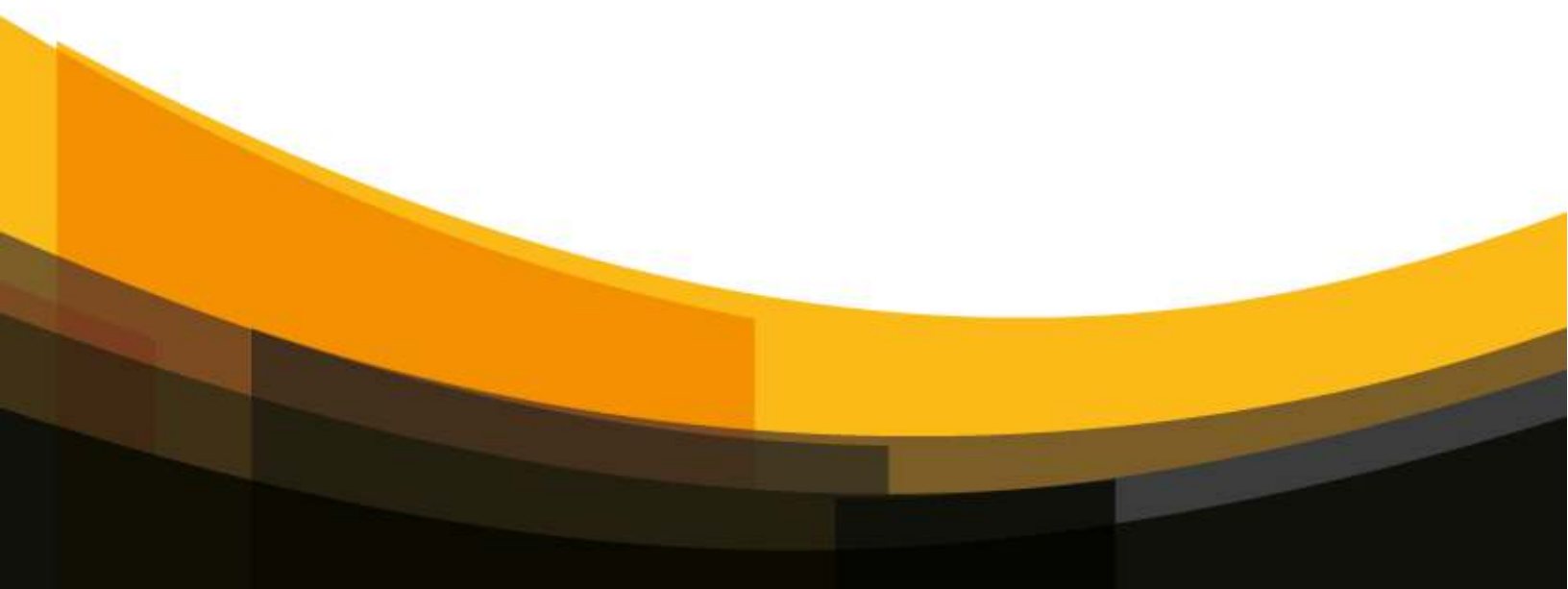
Para el fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje, la Fiscal General de Cuentas Hormechea, a su vez, aprueba la Resolución N.º FGC-070-20 de 28 de octubre de 2020, que instituye el Consejo Editorial de esta instancia de investigación patrimonial y desarrolla su reglamento del régimen interno.

El Consejo Editorial, compuesto por cinco miembros y responsable de velar por el contenido, edición y circulación efectiva de las publicaciones de carácter académico y jurídico que emita la Fiscalía General de Cuentas, aprueba en sesión solemne y por elección de sus integrantes a Andrés Mojica, Secretario General y Arianis González, Jefa de Cooperación Técnica Nacional e Internacional de la Fiscalía General de Cuentas, como presidente y secretaria, respectivamente, del Consejo Editorial, quienes acto seguido presentan la revista El Erario, publicación especializada en temas jurídicos que hoy es puesta en circulación.

La Revista El Erario, cuyo nombre fue propuesto por la Fiscal General de Cuentas y aprobado por mayoría absoluta del Consejo Editorial, germina como un agregado del recién creado Instituto de Formación y Perfeccionamiento Académico y brindará, además, un espacio para la pluma invitada y para los estudiantes de la carrera de derecho y otras áreas afines, para exponer sus artículos.

El resto del Consejo Editorial lo componen el fiscal adjunto Joel De León, Abdiel Castrellón, coordinador de Auditoría Forense y Luján González, representante de una entidad externa, según lo establece la referida Resolución N.º FGC-070-20 de 28 de octubre de 2020 y cuenta con un equipo técnico especializado en las áreas de la diagramación, fotografía y edición.

A poco más de cuatro meses, el Centro de Capacitación de la Fiscalía General de Cuentas se redenomina, para ser conocido como el Instituto de Formación y Perfeccionamiento Académico y así seguir robusteciendo la superación académica y los estudios de esta área del derecho de gran importancia en la lucha contra la corrupción.



Pluma Invitada





El control de convencionalidad mecanismo de tutela de los derechos humanos

Dr. Rigoberto González Montenegro

Procurador de la Administración de la República de Panamá

El control de convencionalidad mecanismo de tutela de los derechos humanos

Dr. Rigoberto González Montenegro

Sumario:

- I. Unas consideraciones introductorias.
- II. En qué consiste el control de convencionalidad.
- III. Las dos modalidades del control de convencionalidad.
- IV. Particularidades del control de convencionalidad difuso.
- V. Unas reflexiones finales.

I. Unas consideraciones introductorias

*A*ludir o abordar lo referente al control de convencionalidad obliga, como mínimo, saber lo que dicho control implica. Es decir, para saber por qué el control de convencionalidad, como se alude en el subtítulo de este trabajo, es un mecanismo de tutela de los derechos humanos, hace necesario tener una idea de lo que este control significa.

Por otra parte, sabiendo de lo que trata el control de convencionalidad, va a permitir, de ser el caso, establecer, y por tanto diferenciar, los distintos tipos o modalidades de control de convencionalidad que existan.

De igual manera, una vez que se tenga una idea de lo que implica el control de convencionalidad, de saber los distintos tipos o modalidades que existan, será posible identificar algunos aspectos o particularidades del control de convencionalidad.

II. En qué consiste el control de convencionalidad

A objeto de contar con una referencia doctrinal que nos permita tener una idea de lo que implica el control de convencionalidad, traemos a colación lo que sobre el control de convencionalidad nos dice, el jurista y autor venezolano, Allan R. Brewer-Carias. Según este autor, el control de convencionalidad es, “el control que usualmente ha realizado y realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias, cuando al juzgar las violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos cometidas por los actos u omisiones de los Estados, ha tenido que confrontar las normas de la misma con las previsiones del derecho interno, de manera que en los casos en los cuales ha encontrado que éstas son contrarias o incompatibles con aquellas, ha ordenado a los Estados realizar la corrección de la inconvencionalidad, por ejemplo modificando la norma cuestionada”¹.

¹ Brewer-Carias, Allan R. Sobre el marco conceptual del control de convencionalidad: antecedentes, derecho de amparo y derecho administrativo. Recopilado en la obra

Estudios sobre el control de convencionalidad. Colección Estudios Jurídicos No. 119. Edit. Jurídica Venezolana, Venezuela, 2015, p. 36

Por su parte, el profesor y jurista mexicano, Miguel Carbonell, señala que, “el control de convencionalidad es consecuencia directa del deber de los Estados de tomar las medidas que sean necesarias para que los tratados internacionales que han firmado se apliquen cabalmente. Recordemos que el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que los Estados parte se comprometen a respetar los derechos que ella establece, pero también a ‘garantizar’ su pleno y libre ejercicio”².

A estos dos conceptos doctrinales sobre el control de convencionalidad se les puede adicionar, para una mejor comprensión sobre lo que implica este control, unos criterios jurisprudenciales que sobre dicho mecanismo de protección de los derechos humanos ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH).

En ese sentido, la Corte IDH, en el Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, en la sentencia de 26 de septiembre de 2006, señalaba lo siguiente:

“124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar

porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”³.

Posteriormente, en el Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú, en la sentencia de 24 de noviembre de 2006, la Corte IDH, señalaba que:

“128. Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también ‘de convencionalidad’ *ex officio* entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes.

² Carbonell, Miguel. Teoría de los derechos humanos y del control de convencionalidad. Centros de Estudios Carbonell, México, 2015, p. 139

³ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, p. 53 www.corteidh.or.cr

Esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, aunque tampoco implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones”⁴.

Como se ve, tanto de los criterios doctrinales aludidos, como de los criterios jurisprudenciales referidos, se deduce y queda claro lo que implica el control de convencionalidad: un mecanismo mediante el cual lo que se busca es que la Convención Americana sobre Derechos Humanos se haga efectiva, que esta se cumpla incluso sobre el derecho interno del Estado que la haya ratificado. Al ser el control de convencionalidad, un mecanismo que hace posible el cumplimiento del objeto y fin de la Convención Americana, como lo es la protección de los derechos humanos en dicha Convención reconocidos, el mismo puede ser puesto en práctica, según las circunstancias, por la Corte IDH como por los jueces del Poder Judicial del Estado Parte de la Convención.

Cuando el control de convencionalidad es llevado a cabo, por los tribunales del país de que se trate, como lo dejó consignado la Corte IDH, el control debe hacerse *ex officio*, lo que significa que ni siquiera tiene que ser requerido por parte alguna. Dicho de otra manera, es una obligación de los jueces y tribunales, ejercer el control de convencionalidad.

En concreto, el control de convencionalidad es un mecanismo que, al ponerse en práctica, permite confrontar el derecho interno del Estado Parte de la Convención Americana con dicha Convención, ello con miras a establecer o determinar, si dicho derecho, es o no acorde o conforme con la Convención así como con los criterios jurisprudenciales que sobre esta ha emitido la Corte IDH. De establecerse que el derecho interno es contrario, violatorio, infractor u omite los parámetros convencionales, se deberá declarar su inconvencionalidad y hacer prevalecer, en consecuencia, la Convención Americana y con ello, garantizar y hacer efectivos los derechos humanos en la Convención previstos.

De eso trata y en eso consiste el control de convencionalidad.

Ahora bien, de lo explicado se infiere que existen dos modalidades de control de convencionalidad, los que son claramente diferenciados uno de otro.

III. Las dos modalidades del control de convencionalidad

En la doctrina se reconoce la existencia de dos modalidades de control de convencionalidad. Uno es el que compete a la Corte IDH y, el otro, el control de convencionalidad que corresponde y han de poner en práctica, de oficio, todos los jueces y tribunales del Poder Judicial de los Estados Parte de la Convención Americana.

El primero es denominado control de convencionalidad externo, supranacional

⁴ Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y

otros) Vs. Perú. Sentencia de 24 de noviembre de 2006, p. 47 www.corteidh.or.cr

o concentrado, por ser de competencia de la Corte IDH. Esta modalidad del control de convencionalidad, es de competencia de la Corte IDH en su condición de intérprete última de la Convención Americana.

La otra modalidad se le denomina como control interno o difuso, por corresponder a todos los jueces y tribunales del Poder Judicial de los Estados Parte de la Convención Americana, cualquiera sea su jerarquía o materia de la que conozcan.

Con relación a estas dos modalidades del control de convencionalidad, nos dice Ingrid Suárez Osma, lo siguiente:

“La doctrina ha diferenciado entre el control de convencionalidad concentrado, externo o en sede internacional y, el difuso, interno o en sede nacional. El primer tipo corresponde al concepto tradicional u original de control de convencionalidad...en él la Corte Interamericana tiene el papel protagónico pues es quien lo realiza en razón a sus propias competencias y finalidad. Pero, a partir de la jurisprudencia de este Tribunal, la doctrina empezó a hablar de un segundo tipo o clase de control de convencionalidad, el interno o difuso”⁵.

Como se ve, el llamado control de convencionalidad concentrado, es el que siempre ha ejercido la Corte Interamericana, como tribunal al que compete conocer de las causas promovidas, en contra de los Estados miembros de la Convención Americana, como posibles infractores de lo

establecido en la Convención. Dispone, en cuanto a esto el artículo 62.3 de la Convención que, “la Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial...ora por convención especial”.

En lo que al otro tipo de control de convencionalidad se trata, nos dice Néstor Pedro Sagüés, que “hasta el año 2006, en el ámbito interamericano”, el control de convencionalidad “lo practicaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos por sí misma, incluso sobre reglas constitucionales (el caso paradigmático es *La última tentación de Cristo*, donde aquel Tribunal, no obstante la presencia de reglas de la Constitución de Chile que autorizaban la censura televisiva, entendió que ellas violaban el Pacto de San José de Costa Rica, en materia de libertad de expresión, levantó una censura y requirió de ese país la modificación de su constitución)”.

Sin embargo, señala Néstor Pedro Sagüés que, “a partir del caso *Almonacid Arellano*, en 2006, pronto reforzado por *Trabajadores Cesados del Congreso*, del mismo año, la Corte Interamericana modificó su tesis clásica y requirió que los jueces nacionales también realizaran, por sí mismos, control de convencionalidad. Estos jueces se convirtieron, de tal modo,

⁵ Suárez Osma, Ingrid. Control de convencionalidad y autoprecedente interamericano. Edit. Grupo Editorial

Ibáñez y Universidad de La Sabana, Colombia, 2015, p. 35

y de manera nítida, en jueces del sistema interamericano de derechos humanos”⁶.

Se sigue de lo antes anotado que, tal y como se indicó, el control de convencionalidad se plantea en dos modalidades, uno el que lleva a cabo la Corte IDH, a la que corresponde conocer y decidir, sobre las posibles responsabilidades internacionales en las que puede incurrir un Estado Parte de la Convención Americana, por desconocimiento, vulneración u omisión de los parámetros convencionales en detrimento de los derechos humanos a los que se comprometió cumplir, al ratificar la Convención. En estos casos se trata del ejercicio del control de convencionalidad concentrado o externo.

La otra modalidad consiste en el control de convencionalidad difuso, el que corresponde poner en práctica, de oficio, todos los jueces del Poder Judicial de los Estados Parte de la Convención. El ejercicio de esta modalidad del control de convencionalidad parte del supuesto que, habiendo un Estado ratificado la Convención Americana, todos sus jueces, así como están obligados a cumplir con su derecho interno, también lo están con respecto a la Convención, la que deberán aplicar en el ejercicio de sus funciones, incluso, haciéndola valer sobre el derecho interno de su Estado, cuando éste sea contrario, infractor u omita los parámetros convencionales.

IV. Particularidades del control de convencionalidad difuso

En base a lo que hemos expuesto sobre el control de convencionalidad, sobre todo con respecto al control de convencionalidad difuso, se pueden identificar una serie de particularidades sobre este mecanismo de protección de los derechos humanos.

Tales particularidades serían:

I) Que además de estar obligados a cumplir su derecho interno, todos los jueces del Poder Judicial de los Estados Parte de la Convención Americana, también deben aplicar, vía el control de convencionalidad, dicha Convención en el ejercicio de sus funciones.

II) Que la puesta en práctica del control de convencionalidad debe hacerse de oficio, lo que significa que su ejercicio por parte del juez de que se trate, no está condicionado a que una de las partes del proceso del que conoce así se lo requiera.

III) Otra particularidad del control de convencionalidad interno o difuso, es que éste lo puede llevar a cabo, cualquier juez sin importar su jerarquía, de ahí su denominación de control de convencionalidad difuso.

IV) Al ejercer el control de convencionalidad, el juez debe tener presente, además de la Convención Americana, los criterios jurisprudenciales que sobre dicha Convención ha ido

⁶ Sagües, Néstor Pedro. Empalmes entre el control de constitucionalidad y el de convencionalidad. La “Constitución convencionalizada”. Facultad de Derecho

y Ciencias Sociales del Rosario, Universidad Católica Argentina, p. 5 consultable en el sitio www.ajp.org.py

emitiendo la Corte IDH, en el ejercicio de sus funciones.

Estas y otras particularidades que ha ido adicionando la Corte IDH, vía los criterios jurisprudenciales emitidos en ejercicio de sus competencias, permiten resaltar la importancia que para la protección de los derechos humanos, a lo interno de los Estados Parte de la Convención Americana, representa el control de convencionalidad difuso, el que ha venido a implicar, todo un cambio de paradigma en la tutela de tales derechos.

V. Unas reflexiones finales

Este espacio no permite agotar todo lo que está relacionado con el control de convencionalidad. Hemos reseñado, apenas, algunos de sus aspectos más relevantes. Lo que queda es profundizar en su estudio, sobre todo lo que la Corte IDH ha estado estableciendo, cada vez que se ha pronunciado sobre este mecanismo. Con ello lo que se busca es conocer, el significado e importancia que este mecanismo representa en la protección de los derechos humanos que son reconocidos, a toda persona, por su sola condición de ser humano.

Dr. Rigoberto González Montenegro

- Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá (1983).
- Cursó estudios de doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España (1986-1988).
- Título de Especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, España (1994).
- Título en Docencia Superior, Universidad de Panamá (2008).
- Doctor en Derecho por la Universidad Santa María La Antigua (2013).

Profesor de Derecho Constitucional e Introducción al Derecho de la Universidad Santa María La Antigua. Ocupa el cargo de Procurador de la Administración y con anterioridad laboró por más de veinte años en el Ministerio Público ocupando diversos cargos. En la práctica privada formó parte de la firma PATTON, MORENO & ASVAT. Es miembro de la Academia Panameña de Derecho y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional.

Ha publicado más de treinta títulos de su especialidad entre los que podemos mencionar: El poder constituyente (1994); El Habeas Corpus (1995), La objeción de Inexequibilidad (1996); El Estado Constitucional y mecanismos de defensa constitucional (1997); El principio Constitucional de la no reelección presidencial (1998); La Constitución: su concepto, creación, y reforma (1999); La Constitución y su interpretación (2001); Los desafíos de la justicia constitucional panameña (2002); El Hábeas Data (2002, segunda edición); Curso de Derecho Procesal Constitucional (2002); El Indulto (2003).



La Transparencia en la Gestión Pública

Dra. Frasema Tijerino Rodríguez

La Transparencia en la Gestión Pública

Dra. Irasema Tijerino Rodríguez

*H*ablar de transparencia en el ejercicio de la función pública no es tarea fácil, ya que implica la sujeción en la aplicación de normas específicas que son de obligatorio cumplimiento, sea cual fuere la autoridad pública tenga a su cargo la decisión, independiente de la forma de gobierno.

Actuar con responsabilidad en el manejo de la cosa pública, requiere de la certeza de confianza en los quehaceres políticos y de los servidores del Estado en general, que debe ser acogida y evaluada por los usuarios, siendo estos, todos los ciudadanos que con su contribución fiscal son colaboradores del financiamiento de los bienes y servicios que el Estado satisface.

Al referirnos a la certeza, estamos entrelazando la seguridad jurídica que viene a garantizar si las acciones de cada ente que participa en la decisión, es apegada a derecho y, que los procedimientos aplicados son confiables y verificables ante cualquier escenario, sin estar supeditada a interés, autoridad o persona alguna.

En este sentido, es de vital importancia conocer lo que debe entenderse por Transparencia, según la definición proporcionada en la Ley 6 de 22 de enero de 2002, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, al indicar en el Artículo 1, numeral 13 que es el “deber de la administración pública de

exponer y someter al escrutinio de la ciudadanía la información relativa a la gestión pública, al manejo de los recursos que la sociedad le confía, a los criterios que sustentan sus decisiones y a la conducta de los servidores públicos”.

Tomando como base el concepto de transparencia esbozado, los servidores del Estado deben estar regidos por el conjunto de principios y normas de obligatorio cumplimiento (código de ética), que adecúen su conducta y modelos a seguir para la configuración de un buen gobierno (ética), así como las acciones en el ejercicio de sus funciones, en consonancia con su competencia, las cuales deben fundamentarse a través de resoluciones y actos, aplicando las normas legales (principio de legalidad) y sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos, que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función pública que tienen encomendada.

Todo lo expuesto, nos lleva a reflexionar sobre la importancia relevante de una óptima gestión pública en Panamá y ello, es tarea inmediata y urgente para el desarrollo sostenible de nuestro país, como responsabilidad insoslayable hacia el futuro, para el logro de los fines, metas y proyectos que tiene a cargo la administración (entidades) de los recursos presupuestarios y financieros, para la satisfacción de los servicios públicos y

desarrollo social, como propósito elemental de la gestión pública.

Bajo la óptica de la ley 22 de 27 de diciembre de 2006 sobre contratación pública, que ha sufrido sus reformas y editada en texto único a través de la ley 153 de mayo de 2020, reglamentada por el Decreto Ejecutivo 439 de septiembre de 2020, se ha diseñado la plataforma virtual denominada PanamaCompras, en donde se hace público el detalle de las compras que ejecutan las entidades estatales, que viene a configurar la aplicación del principio de publicidad que rige en el sistema de compras panameño, el cual viene a ser un avance sistemático de desarrollo, que permite que la ciudadanía pueda visualizar de manera oficial y permanente, el uso del dinero del Estado, en consonancia con los requerimientos impuestos por ley.

Por ello, como una forma de verificación que las entidades cumplan el mandato legal previsto en la ley de contrataciones públicas, tenemos la Dirección General de Contrataciones Públicas, que tiene la competencia funcional de asesorar a las entidades en sus procesos de compras y contrataciones y, desarrollar el Código de Ética en la contratación pública, que será de obligatorio cumplimiento para todos los que participan en los actos de contratación pública, con la finalidad de evitar colusión, medidas anticorrupción, medidas de transparencia y buenas prácticas en la contratación pública.

Así tenemos, que las normas presupuestarias, también imponen la obligación a las entidades, del informe anual que debe contener en detalle el uso

del dinero, bienes y efectos consignados en su presupuesto de funcionamiento e inversiones.

Otro aspecto a considerar, lo establece la ley 6 de 22 de enero de 2002 de Transparencia y Acceso a la Información, que ha desarrollado una serie de lineamientos que deben adoptar los representantes legales institucionales en el cumplimiento de sus funciones, como lo es el Código de Ética de los servidores públicos, tomando como premisa prevalente, el mandato constitucional (artículo 18) de que el servidor público solo puede hacer lo que expresamente señala la ley.

Asímismo, no debemos perder de vista que cuando se asume un cargo público, hay el compromiso de atender los requerimientos impuestos por ley y se debe tomar en consideración los diferentes conceptos de agente o empleado de manejo establecidos desde el Código Fiscal hasta la ley 67 de 2008 y sus modificaciones, que crea la jurisdicción de cuentas, para el juzgamiento de los delitos patrimoniales, que está a cargo de la Fiscalía General de Cuentas y del Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de las competencias que lleva a cabo la Contraloría General de la República como ente superior de fiscalización que ejerce el control previo y posterior atribuido constitucional (artículo 279) y legalmente (ley 32 de 8 de noviembre de 1984 y sus modificaciones).

Ahora bien, como medida final para la transparencia en la gestión pública, corresponde a la entidad fiscalizadora,

Contraloría General de la República, recabar de los funcionarios públicos correspondientes, los informes de gestión fiscal, para lo cual debe establecer formalmente, la reglamentación que determine la forma y el plazo en que debe hacerse la rendición de cuentas para el examen y finiquito que corresponda, en cuanto a la actuación relacionada con los fondos o bienes que recibe, maneje, custodie o administre, dentro de un periodo determinado, de conformidad con la regulado en la ley 32 de 8 de noviembre de 1984.

Así pues, como deber jurídico, corresponde a la Contraloría General de la República y al Ministerio de Economía y Finanzas, publicar un informe sobre la ejecución presupuestaria, a más tardar dentro de los treinta días posteriores a dicha ejecución, en atención al mandato de la ley 6 de 22 de enero de 2002, que dicta normas de transparencia en la gestión pública.

Por consiguiente, corresponde a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, creada mediante ley 33 de 2013, fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales sobre la Ley de Transparencia, el Código de Ética, gobiernos abiertos, acceso a la información y otras iniciativas afines a la prevención previstas en convenciones, tratados, programas, convenios y cualquier otro acuerdo internacional o nacional en materia contra la corrupción y en pro de la transparencia gubernamental.

Además, velará por el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución

Política de la República de Panamá en el tema de Derecho Constitucional de petición y de acceso a la información, así como por los derechos previstos en los convenios, acuerdos, tratados, programas internacionales y nacionales en materia de prevención contra la corrupción y por la inserción e implementación de las nuevas políticas de prevención en la gestión pública a nivel gubernamental por iniciativa propia o por propuestas nacionales o internacionales.

En conclusión, debemos contribuir en la consolidación de una gestión pública transparente, solventando las situaciones difíciles y complejas que permitan mejoras sustanciales, orientada a la equidad e imparcialidad, en apego a los principios de la administración presupuestaria que establece claramente que las actuaciones de quienes participen en las distintas fases de la administración presupuestaria, se regirán por los principios de legalidad, transparencia, eficiencia, eficacia, publicidad y responsabilidad, para hacer efectivo el ejercicio periódico de la rendición de cuentas (ley 176 de 13 de noviembre de 2020, que rige el presupuesto para la vigencia fiscal 2021).

El ejercicio de control interno por las instituciones es de suma importancia para el seguimiento y la evaluación del Presupuesto, sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República, para efectuar la verificación del cumplimiento que garantice el logro de los objetivos y metas institucionales en términos de economía, eficiencia y efectividad.

Dra. Irasema Tijerino Rodríguez

ESTUDIOS SUPERIORES:

- **Universidad de Barcelona-España**, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Departamento de Derecho Administrativo, Programa de Doctorado, Bienio 1994-96 (becada por la Agencia Española de Cooperación Internacional).
- **Doctorado en Derecho Administrativo**, Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Administrativo.
- **Pasantías en Universidad** financiadas por el Instituto Andaluz de Administración Pública (España).
- **Universidad de Panamá**, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, 1983. Idoneidad No.1177.

DOCENCIA UNIVERSITARIA:

- Docente en Maestría en Derecho Público; El control gubernamental, Universidad de Panamá.
- Docente en Maestrías en Derecho Administrativo y Diplomados de Contratación Pública, Universidad Latina de Panamá.
- Docente en Maestría en Derecho, Módulo, Responsabilidad Civil del Estado, Universidad Latina de Panamá.
- Docente en Diplomado Superior en Derecho Administrativo: Módulo de Responsabilidad del Estado en las Demandas Contenciosas, Universidad Santa María La Antigua (USMA).
- Programa Universidad de Panamá, Banco Mundial, Procuraduría de la Administración, Docente en Diplomados (presenciales y virtuales).
- Docente en Diplomado en Gestión Pública, con énfasis en Contratación Pública, Programa de Capacitación de Universidad de Panamá-Procuraduría de la Administración, Dirección General de Carrera Administrativa.
- Docente en el Diplomado Alta Gerencia Empresarial, Universidad a Distancia de Panamá.



Ver Diplomado

*Diplomado de Formación de Formadores para la
Investigación y Juzgamiento en la Jurisdicción de Cuentas*



*Rol de la Fiscalía General de Cuentas en la
Administración efectiva del buen manejo de fondos públicos*
Mgter. Gerineldo Sousa Melo

La opinión, el contenido, la redacción y la composición del presente artículo es responsabilidad de su autor.

Rol de la Fiscalía General de Cuentas en la administración efectiva del buen manejo de fondos públicos

Mgter. Gerineldo Sousa Melo

*A*l crearse la Fiscalía General de Cuentas, mediante la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, con la función de investigar las presuntas irregularidades contenidas en los reparos efectuados por la Contraloría General de la República en las cuentas de empleados y agentes de manejo, que afecten los fondos y bienes públicos, con estricto apego a la garantía Constitucional del Debido Proceso, se establece que tiene la competencia para hacer análisis de la forma en que se han manejado los fondos, considerando lo pagado a personas naturales o jurídicas no públicas y en las que pueden hacer las diligencias que le permita recabar evidencias para esclarecer hechos contenidos en informe preparado por los auditores de la Contraloría General de la República.

Dentro del proceso de investigación que le permite la Ley No. 67 de 14 de noviembre de 2008 a la Fiscalía General de Cuentas, se pueden aplicar procedimientos analíticos, entre los que están los siguientes:

a) requerir información a las instituciones bancarias, públicas y privadas, incluyendo información relativa a cuentas cifradas, cuando considere que dicha información sea relevante para la investigación.

b). requerir informes, interrogar a testigos, hacer careos.

c). realizar inspecciones o reconstrucciones.

d). practicar peritajes o cualquier otra prueba lícita con el objeto de determinar la existencia de la lesión patrimonial causada al Estado y su monto, la identidad de los involucrados y su grado de responsabilidad.

e). exigir la información a cualquier funcionario o servidor público y a personas naturales o jurídicas, quienes están obligados a colaborar con la investigación dentro del marco de sus funciones.

Considerando lo expuesto, plasmo a continuación, una serie de técnicas de auditoría o procedimientos analíticos de investigación, que permitan a los funcionarios especializados de la Fiscalía General de Cuentas y que permite cumplir con lo plasmado en este artículo, sobre recabar evidencias o determinar vehículos que utilizan quienes reciben fondos violentando el principio de integridad, y que detallo a continuación:

Cómo analizar información de facturas comerciales:

Existen muchas maneras de exagerar los ingresos o activos, incluyendo las siguientes:

1. Facturación y retención de transacciones.

Este método de exageración de ingresos sucede cuando una compañía factura al cliente y registra la venta como reconocida, a pesar de que el activo permanece bajo el control físico del vendedor hasta una fecha posterior.

Una señal de fraude se aprecia cuando el vendedor registra el “inventario no enviado” como “inventario bajo posesión” y reconoce los ingresos de la venta.

2. Reconocimiento tardío de devoluciones.

Esta podría ser otra forma de “administración de ingresos” o ser una señal de robo y fraude. Si las devoluciones no se reconocen (por ejemplo, el recuento de inventario no cambia al recibirse una devolución), esto podría indicar fraude en el punto de venta/punto de devolución.

Esto puede ser increíblemente difícil de detectar, especialmente si hay confabulación.

3. Contabilidad basada en el precio del mercado.

Esta es una práctica de contabilidad que se refiere al registro de activos o pasivos basándose en su precio comercial actual, y no en su costo histórico.

Si bien esta constituye una práctica completamente legal cuando se hace

correctamente, también puede usarse para cometer fraude, particularmente en situaciones en las que es difícil determinar un precio de mercado preciso para los activos.

Preguntas preliminares sobre la responsabilidad de terceros

Antes de lanzar una iniciativa legal contra un tercero, hay que determinar los activos financieros con los que cuenta el delincuente financiero.

En segundo lugar, una vez que se hayan identificado los asociados, cómplices, encubridores y facilitadores con activos, deben ser perseguidos si los hechos y las leyes lo justifican.

Debido a que los esquemas de delito y fraude financiero exitosos implican obtener, transferir y gastar grandes sumas de dinero, por lo general se podrán obtener documentos para reconstruir el flujo de fondos.

Es difícil ejecutar exitosamente un gran esquema delictivo sin dejar una pista importante.

Entidades de Fachada

En términos generales, una entidad de fachada es una compañía o entidad que ha sido creada y es controlada por otra compañía u organización, pero que da la impresión de no tener relación o conexión con la compañía que la controla.

En el contexto del delito financiero, las entidades de fachada son por lo general aparentes negocios legítimos que tienen presencia física y que cuentan con operaciones reales, pero cuyo propósito

principal es lavar el dinero sucio de los delincuentes.

Análisis de origen y aplicación de fondos

Se deben obtener todos los registros bancarios que el delincuente financiero y sus cómplices utilizaron, estados de cuenta bancarios, ambos lados de todos los cheques, boletas de depósito y comprobantes de transferencias bancarias.

La técnica de auditoria para hacer un análisis de origen y aplicación de fondos, se debe ingresar datos en una hoja de cálculo o en software de simulación de cuentas bancarias.

Considerando los siguientes puntos:

- Liste, agrupe y analice todas las entradas (depósitos) de dinero. Siga la cadena hacia atrás para determinar el origen de cada depósito y continúe con el rastro hasta que se identifique la fuente última de los fondos.
- Liste, agrupe y analice todas las salidas de dinero de la cuenta (cheques o débitos).
- Siga la cadena de las salidas hasta que se determine su destino final. Se debe prestar especial atención al pago de comisiones, honorarios, etc., a los profesionales, incluyendo especialmente a los "asesores de inversión".
- Cuando se conocen los receptores de los fondos, se debe determinar el propósito de cada pago. Los registros pueden responder a esta inquietud o,

en su defecto, dicha información podría obtenerse de entrevistas con los empleados que podrían traer luz a la cuestión.

- A menudo, se pueden advertir grandes retiros de dinero en efectivo o transferencias inexplicables desde una cuenta.
- Busque explicaciones, que pueden incluir la compra de cheques de caja, retiros de dinero en efectivo para la compra de giros o transferencias bancarias en otras instituciones, retiro de efectivo para su depósito en cuentas en otras instituciones, o pagos en efectivo a los funcionarios públicos.
- Los cheques cancelados siempre han sido una de las fuentes más productivas de pistas para los investigadores de delitos financieros porque un documento puede ofrecer una imagen completa de una transacción financiera, desde la fecha, el monto, el receptor de los fondos, el pagador, el método y lugar de negociación, hasta el uso final de los fondos.
- Si se ha utilizado el dinero para las transferencias electrónicas, el registro de la transferencia de dinero documentará esto. Si se sospecha de otras cuentas financieras, se deberán emitir citaciones de comparendo o solicitudes de información a las instituciones donde se encuentran las cuentas.
- Identifique los saldos de la cuenta en los momentos clave, en función de las necesidades de la investigación. Por ejemplo, si se está preparando

un análisis del origen y aplicación de fondos, entonces los saldos iniciales y finales serán identificados como parte de este cálculo.

Señales de alerta de corrupción en pagos de terceros.

Un especialista en investigaciones de delitos económicos, que esté auditando un probable caso de corrupción debe tener presente que los contratos, pagos y acuerdos comerciales con terceros son mecanismos comunes para que se realicen pagos corruptos.

En estas situaciones, varias señales de alerta como las siguientes pueden indicar que los terceros pueden estar involucrados en un ardid de corrupción:

- Comisiones/honorarios mucho más altos que los que cobran otros terceros en el mismo sector, sin una explicación con un fundamento comercial convincente.
- Solicitud de acuerdos de pago inusuales, extraños o anormales, tales como comisiones excesivas o reembolsos inusuales.
- Solicitud de que los pagos de los servicios se realicen en cuentas en el extranjero.
- Terceros que no tienen mucha experiencia en el campo en el que supuestamente trabajan.
- Facturas de terceros con descripciones muy vagas o que no describen los servicios que se prestaron.
- Vínculos estrechos actuales o previos con funcionarios gubernamentales.

La opinión, el contenido, la redacción y la composición del presente artículo es responsabilidad de su autor.

A continuación, una lista de algunos canales comunes:

Cuentas bancarias en el extranjero o en centros “offshore”.

Con la finalidad de tratar de confundir o limitar la acción de recuperación de fondos producto del mal manejo de fondos públicos, hacen transferencias electrónicas a nombre de testaferros o familiares

Estructuras que esconden al Beneficiario Final.

El dueño nominal, nominativo y a veces llamado apoderado aparece registradamente en una sociedad para proteger la identidad del beneficiario o propietario real de la misma.

El funcionario público que ha recibido fondos producto de soborno por participar en actos de corrupción, tratará de esconder la naturaleza de su riqueza mal habida, por lo que utilizará testaferros para registrar a nombre de otros la compra de activos que no se ajusten a su generación patrimonial.

Los investigadores deberán ampliar el alcance de los procedimientos de investigación, para determinar que el funcionario auditado sea en realidad el beneficiario final de los bienes que utiliza.

Compañías Pantalla, Fantasmas o Ficticias

Las compañías pantallas o ficticias no tienen presencia física, por lo general sus dueños no son conocidos, y algunas veces proyectan la imagen de ser

negocios sólidos que utilizan fondos legítimos.

Por lo general, son compañías que existen solamente en papel. Pueden tener cuentas bancarias y realizar transacciones financieras sin dar señales de que son fantasmas o ficticias.

Las compañías pantalla por lo general no realizan transacciones comerciales o negocios por sí mismas, son sociedades que no tienen actividad ni realizan negocios, un concepto similar al de las compañías pantalla.

Algunas de estas compañías pueden estar inactivas por años antes de ser vendidas.

Empleados ficticios

Una corporación u otra organización puede incrementar falsamente su planilla con empleados que no existen, con la intención de disfrazar u ocultar la evidencia de pagos corruptos. También podría efectuar sobornos mediante la emisión de cheques para empleados que han dejado la compañía, o directamente añadiendo a funcionarios públicos, sus familiares, o asociados a la nómina de la compañía.

Es importante que los investigadores hagan una revisión de los cheques emitidos por los proveedores sobre los cuales se tienen indicios de participar en actos de corrupción, ya que muchas veces para esconder el pago de soborno a funcionarios públicos, confeccionan cheques a nombre de ex empleados,

donde tienen todas las generales de los mismos o a través de nombres ficticios.

Una técnica para descubrir esta forma de ocultamiento, es verificar el endoso de pago de los cheques, para determinar si fueron cambiados en la caja del proveedor.

Negocios ficticios

Un funcionario corrupto podría presentar facturas por servicios inexistentes a nombre de una compañía pantalla que él o ella controla. Una debida diligencia de negocios que reciben pagos puede revelar compañías ficticias que sirven como vehículos e instrumentos para la corrupción.

Pagos a través de préstamos

Una organización o individuo puede utilizar préstamos para disfrazar pagos corruptos, de muchas maneras. Un pagador puede dar un soborno al destinatario directamente, pero luego hacerlo figurar en sus libros contables como un préstamo legítimo. Una compañía o individuo también pueden otorgar un préstamo verdadero a un funcionario público o entidad, pero con condiciones muy favorables, tales como un interés muy bajo o libre de interés.

El equipo de recuperación de activos debe revisar los registros públicos corporativos y otros registros para determinar otras entidades comerciales que incluyen al delincuente, miembros de su familia, empresas afiliadas o cómplices como funcionarios, directores o agentes registrados.

Mgter. Gerineldo Sousa Melo

Educación

- Maestría en Derecho Bancario. Universidad Santa María la Antigua 2008.
- MBA con énfasis en Banca y Finanzas, Universidad del Istmo 1998.
- Licenciado en Contabilidad de la Facultad de Administración Pública y Contabilidad en el año 1986.
- Auditor Interno Certificado por el Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana en el año 1993.
- Auditor interno Diplomado por el Instituto de Auditores Internos de España en el año 1995.
- Especialista en Docencia Superior. UNESCPA. 2015.
- Certificado como Especialista en Investigaciones de delitos financieros (CFCS), obtenido en la Asociación de Especialistas certificados en investigaciones de delitos financieros (ACFCS).
- Investigative Financial Forensic Auditing, otorgado por United States Interamerican Community Affairs, USA, 2008.



*La Educación Virtual Aplicada en la
Fiscalía General de Cuentas de Panamá
Ing. Víctor Antonio Acosta Guillén*

La Educación Virtual Aplicada en la Fiscalía General de Cuentas de Panamá

Ing. Víctor Antonio Acosta Guillén

Según Lorenzo García Aretio, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) (España), “Los factores más destacados que han provocado el nacimiento y posterior desarrollo de la enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia han sido: los avances sociopolíticos, la necesidad de aprender a lo largo de la vida, la carestía de los sistemas convencionales, los avances en el ámbito de las ciencias de la educación y las transformaciones tecnológicas.” De lo expuesto con antelación, enfatizaremos sobre las transformaciones tecnológicas.

Con el nacimiento del internet, por los años 60, se marcó un hito en la historia de las comunicaciones, por ende, a todas las formas de vida social que pudieran tener acceso a estas nuevas tecnologías. Para 1985, ya se hablaba de “ciber espacio” comparando la cobertura del internet al universo planetario que nos rodea y sus miles de millones de nodos que, en pleno siglo 21, lo conforman.

Con el internet, la ingeniería, la medicina, las diversas ciencias, comunicaciones y la conformación de nuevas sociedades - como la del conocimiento - se han desarrollado a niveles jamás pensados e incluso es una excelente oportunidad para la educación y la formación.

Las nuevas formas de tecnología, tanto de velocidades de internet súper altas como la 5G, están a la vuelta de la esquina y softwares especializados han permitido

que todo sea servido, en cuanto a infraestructura para viabilizar una forma de aprendizaje que ya data de décadas, pero no fue sino hasta el 2020 cuando pudimos ver su crucial importancia.

Lamentablemente, nuestro país no ha crecido de manera proporcional con este avance. Si bien es cierto, el internet ha sido incorporado en muchos escenarios del entorno comercial privado y algunos estatales (como la ACP o la AIG), en otros renglones estatales se le ha dado la espalda a la inversión en tecnología.

Una pregunta crucial puede ser: ¿Es posible que la falta de inversión en recursos tecnológicos es realmente económica o es la falsa comprensión de la importancia de adquirirlas?, o será que ¿No tenemos profesionales aptos para ofertar o recibir nuevas formas de aprendizajes, a través de nuevos modelos de enseñanzas?

Algunas entidades estatales han acogido la modalidad de estudio a distancia como una manera alternativa (y posiblemente permanente), de formar a su recurso humano. Tal es el caso de la Fiscalía General de Cuenta de la República de Panamá, relativamente joven en existencia, quien ha volcado recursos y esfuerzos de manera inteligente al asociarse con instituciones meca en educación virtual para crear programas de reforzamientos y actualización de su valioso personal.

El pasado mes de septiembre 2020, y con el apoyo de UDELAS como asesor técnico, la FGC realiza el Diplomado en Investigación y Juzgamiento en la Jurisdicción de Cuentas, el cual fue desarrollado en su totalidad a través de una LMS (Software manejador de aprendizaje).

Gracias al apoyo de la AIG, este diplomado se realizó en la plataforma Blackboard, muy adecuada, estable y con reconocimiento a nivel mundial. Su mediación entre los diversos facilitadores, a través de las herramientas sincrónicas y asincrónicas hicieron que los participantes, desarrollaran competencias técnicas sobre Investigación y Juzgamiento en la Jurisdicción de Cuentas y sobre el uso de entornos virtuales, lo cual les permitirán crear recursos digitales para continuar un plan de capacitación, continuo y exitoso.

La gestión del tiempo, dosificación del contenido, el constante seguimiento, la calidad de los recursos, creatividad y efectivo uso de los espacios virtuales, entre otras, coadyuvaron para lograr que esta experiencia en la FCG finalizara con mucho éxito. Este esfuerzo

mancomunado permite ubicarla como una de las entidades estatales que ha apostado por las nuevas formas de la tecnología y la comunicación como herramienta de crecimiento y fortalecimiento institucional. Todo esto gracias a la visión prospectiva de la administración, bajo la dirección de la Sra. Fiscal General, Waleska R. Hormechea Beluche.

La educación virtual (que no debemos confundir con la educación a distancia) ha llegado para quedarse. Y no solo en las aulas, sino también en las formas como las empresas e instituciones pueden sacarles provecho ahorrando viáticos, hospedajes, viajes y minimizando el gasto de contrataciones de expertos.

Felicitamos a la Fiscalía General de Cuentas por la iniciativa de acoger nuevas formas de enseñanza y formación a distancia para sus colaboradores y para todos aquellos que tengan algún rol dentro del sistema educativo, en cualquier nivel, quienes ante las circunstancias difíciles pueden realizar y ejecutar lo propio por reinventarse y adaptarse a diferentes modalidades.

Ing. Víctor Antonio Acosta Guillén

- Trabajo de Grado, Maestría en Ingeniería de E-Learning.
- Postgrado Entornos Virtuales de Aprendizaje.
- Postgrado en Docencia Superior.
- Ingeniería de Sistemas Computacionales.
- Instructor Cisco CCNA.
- Especialidad: Informática (Entornos Virtuales).



Máxima Estudiantil

La opinión, el contenido, la redacción y la composición del presente artículo es responsabilidad de su autor.

Vector sombrero de graduación tomada de: Designed by macrovector / Freepik

Los particulares frente al Proceso de Cuentas

¿Cuál es el alcance de la Jurisdicción de Cuentas a los particulares?

Alba Cristina Goti

Resumen

En tiempos que la corrupción y la malversación de fondos gubernamentales son temas que encontramos a diario en la palestra pública, se hace necesario conocer quiénes pueden ser sujetos a un proceso de cuentas. Tradicionalmente se entiende que la Jurisdicción de Cuentas juzga a los empleados de manejo y a los agentes de manejo; no obstante, nos planteamos el siguiente cuestionamiento: ¿Existirán otros posibles responsables por las lesiones patrimoniales al Estado, además de los tradicionales? Mediante este artículo ensayamos nuestra postura acerca de la calidad de los particulares frente al proceso de cuentas. Vale acotar que, vertimos nuestro criterio, sin perjuicio de que este pueda o no ser una opinión compartida dentro la comunidad forense.

Summary

In times when corruption and embezzlement of government funds are issues that we encounter daily in the public arena, it is necessary to know who may be subject to an account process. It is traditionally understood that the Jurisdiction of Accounts judges the management employees and the management agents. However, we ask ourselves the following question: Are there other possible culprits for liability of State funds, in addition to the traditional ones? Through this article, we elaborate our position on the quality of the private citizens and private enterprises accused in the account process. It is worth noting that, we express our criteria, without prejudice to whether or not this may be a shared opinion among the forensic community.

Palabras claves

Jurisdicción de Cuentas, lesiones patrimoniales al Estado, particulares, agentes de manejo, empleados de manejo.

Key words

Jurisdiction of Accounts, liability of State funds, private citizens, private enterprises, management agents, management employees.

Antecedentes

La Jurisdicción de Cuentas es especialísima en su proceso y sus procedimientos, la podríamos describir como un híbrido entre lo administrativo y lo civil con ribetes penales, particularmente en cuanto a las etapas procesales que se asemejan a las del hoy derogado Sistema Penal Inquisitivo Mixto. Nuestro planteamiento se fundamenta en que esta jurisdicción se desarrolla mediante una ley sucinta, que se suple de otras normativas según sea aplicable, dentro de las que podemos mencionar la Ley 38 del 31 de julio del 2000¹ y el Libro Segundo del Código Judicial.²

Como antecedentes, traemos a colación que esta jurisdicción fue concebida desde el nacimiento de la República de Panamá, mediante la Ley 56 de 25 de mayo de 1904; no obstante, posteriormente desapareció la figura del juzgador de cuentas, mediante la Ley 30 de 30 de diciembre de 1918, que reemplazó la figura de ente jurisdiccional con la instalación de un Agente Fiscal, subordinado directo del presidente de la

República, quien asumió todas las funciones del Juez de Cuentas.

Si bien, la Jurisdicción de Cuentas resurge mediante el acto reformativo de 2004 de la Constitución Política de la República de Panamá de 1972, que introduce el artículo 281 por el que se establece la jurisdicción y se crea el Tribunal de Cuentas; no menos cierto es que, desde la creación de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984³, hubo esfuerzos para restablecer esta importante institución cuya finalidad es lograr la restitución de las lesiones patrimoniales ocasionadas al Estado panameño. Es también importante señalar que, a finales de 1989 con la caída de la dictadura en Panamá, se instauró la Dirección de Responsabilidad Patrimonial como la encargada de dirimir las causas que eventualmente pasaron a ser competencia del Tribunal de Cuentas.

En la actualidad, la Jurisdicción de Cuentas se encuentra regulada mediante la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, que desarrolló la jurisdicción en virtud de que fuera

¹ La Ley 38 de 31 de julio de 2000, Que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración, regula el Procedimiento Administrativo General y dicta disposiciones especiales.

² El Libro Segundo de Código Judicial establece el Procedimiento Civil.

³ La Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, Por la cual se adopta la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

elevada a rango constitucional tal como mencionamos anteriormente.

Objeto de la Jurisdicción de Cuentas

De conformidad al artículo 1 de la Ley 67 de 2008, tenemos que la Jurisdicción de Cuentas se instituyó para investigar y juzgar la responsabilidad patrimonial derivada de las supuestas irregularidades, contenidas en los reparos formulados por la Contraloría General de la República a las cuentas de los empleados y agentes de manejo de los fondos y bienes públicos.

El artículo 2 de la misma excerta legal señala que, para los efectos del proceso de cuentas se considera *empleado de manejo* a todo servidor público que reciba, recaude, maneje, administre, invierta, custodie, cuide, controle, apruebe, autorice, pague o fiscalice fondos o bienes públicos.

Señala también que, se considera *agente de manejo* a toda persona natural o jurídica que reciba, recaude, administre, invierta, custodie, cuide, controle, apruebe, autorice o pague por cualquier causa bienes o fondos públicos.

A la luz de lo antes descrito, da la impresión que solo existen dos escenarios que permitan a una persona ser objeto de juzgamiento en un proceso de cuentas; por una parte, los *empleados de manejo*

quienes por ser servidores públicos y por las funciones inherentes a sus cargos tengan algún tipo de responsabilidad como administradores o reciban fondos o bienes públicos; y por otra, los *agentes de manejo* quienes sin ser servidores públicos (ya sea personas naturales o jurídicas) coadyuven en la administración pública.

Nos preguntamos entonces, ¿Serán los particulares que contraten con el Estado, en calidad de proveedores, los mismos particulares a los que hace mención el artículo 2 de la Ley 67 de 2008, cuando define a los *agentes de manejo*? ¿Tendrán todas las personas (naturales o jurídicas) que reciban dineros públicos, automáticamente la condición de *agentes de manejo*?

Lo anterior inevitablemente nos lleva a evaluar, si existe o cabe juzgamiento por responsabilidad patrimonial a un particular, que sin tener funciones de administrador, haya recibido fondos públicos en concepto de contraprestación ya sea por un bien suministrado o un servicio brindado al Estado; o a quien haya recibido fondos públicos en calidad de beneficiario de auxilios sociales, específicamente las ayudas económicas o en especie, que sean sufragadas con fondos estatales.

Hemos de considerar que el artículo 3 de la Ley 67 de 2008, en sus numerales 1 y 2 establece que la Jurisdicción de Cuentas se ejerce de manera permanente en todo el territorio nacional para juzgar las causas por reparos que surjan en las cuentas que rindan los *empleados de manejo* y *agentes de manejo* ante la Contraloría de la República en razón de la recepción, la recaudación, la inversión o el pago de fondos públicos, o de la administración del cuidado, de la custodia, de la autorización, de la aprobación o del control de fondos o bienes públicos.

Agrega también el mismo artículo, en el numeral 3 las causas por los reparos que surjan en la administración de las cuentas de los *empleados* y *los agentes de manejo* en razón de examen, auditoría o investigación realizada por la Contraloría General de la República.

Por último, con el numeral 6 del artículo 3, se abre el compás a juzgar las causas por pago a una persona natural o jurídica que conlleve un menoscabo o pérdida, mediante dolo, culpa o negligencia, por uso ilegal o indebido de fondos o bienes públicos.

Calidad de los vinculados

Profundizando en la ley que desarrolla la Jurisdicción de Cuentas y haciendo uso de la hermenéutica jurídica debemos tomar en cuenta que, el artículo 38 de la precitada norma contempla los criterios que debe aplicar el Fiscal General de Cuentas, para vincular a los posibles involucrados en la existencia de un hecho irregular que cause afectación patrimonial del Estado; en ese sentido, el mismo artículo describe quienes pueden ser objeto de vinculación, a saber: 1) empleados de manejo, 2) agentes de manejo, 3) servidores públicos, 4) los exservidores públicos, 5) los particulares.

De lo anterior podemos colegir que, el legislador hace una diferenciación de los sujetos que pueden ser vinculados a la afectación patrimonial; en consecuencia, llamados a juicio y eventualmente condenados a responder con su patrimonio por la lesión ocasionada el Estado, incluyendo no solo a quienes tengan injerencia en los actos de manejo de los bienes o fondos gubernamentales, sino también a los particulares ajenos a la administración de la cosa pública.

En virtud de este análisis, somos del criterio que si bien el artículo 2 de la Ley 67 de 2008 define quienes son considerados los

empleados de manejo y agentes de manejo, lo hace en función de que el artículo 1 señala que las cuentas examinadas por la Contraloría General de la República serán las de los agentes y empleados de manejo.

De lo anterior, en concordancia con el artículo 3, podríamos interpretar que para que se configure la lesión patrimonial, siempre ha de existir un empleado o agente de manejo involucrado; y en algunas ocasiones podrá también haber otras clases de vinculados que deban responder solidariamente ante la Jurisdicción de Cuentas, aunque no medie *manejo* alguno en su actuar.

El análisis que planteamos ha sido debatido por nuestra Máxima Corporación de Justicia, en acciones que atacaban Resoluciones de Cargo⁴ proferidas por el Tribunal de Cuentas, en donde se examinó como tema central la calidad de los procesados; en este sentido la Corte Suprema de Justicia ha expresado lo siguiente:

⁴ Las Resoluciones de Cargo son en esencia las Sentencias Condenatorias, por las que se declara la responsabilidad patrimonial de los involucrados, de conformidad a lo establecido en el numeral 1 del artículo 72 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008.

⁵ Extracto de Fallo en Demanda Contencioso-Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare

...En Sentencia de 31 de enero de 2014, esta Superioridad sostiene el criterio de que cualquier persona natural que se beneficie de fondos públicos sea o no agente de manejo puede ser declarado responsable patrimonialmente:

“Sobre el particular, el artículo 2 del Decreto de Gabinete 36 de 1990, norma que se estima como infringida por el acto acusado, aplicable al caso que nos ocupa, pero, derogado por la Ley 67 de 2008, además de atribuir facultad para decidir sobre la responsabilidad patrimonial, señala expresamente, que ésta, le puede ser atribuida, a los agentes y empleados de manejos y fondos públicos; a los agentes y encargados de su fiscalización; a las personas que a cualquier título tengan acceso a fondos o bienes públicos que se hubieren aprovechado indebidamente de los mismos, en su beneficio o en beneficio de un tercero, entre otros.”

...⁵ Lo resaltado es nuestro.

Nuestras conclusiones

Del pronunciamiento *ut supra*, podemos tener un panorama más claro en cuanto a la calidad de los involucrados en el proceso de cuentas, en donde la Corte Suprema de Justicia ha determinado con claridad meridiana, que no solo los *empleados de manejo y agentes de manejo* pueden ser

Nula, por ilegal, la Resolución de Cargos No. 27-2011 de 1 de noviembre de 2011, dictada por el Tribunal de Cuentas, el Acto Confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones. Ponente Abel Augusto Zamorano. Panamá, cinco (5) de julio de dos mil dieciséis (2016).

juzgados en esta jurisdicción sino también las personas, que a cualquier título tengan acceso a fondos o bienes públicos y se hubieren aprovechado indebidamente de los mismos, en su beneficio o de un tercero.

Por todo lo anterior, creemos firmemente que la Jurisdicción de Cuentas está llamada a recuperar el patrimonio del Estado y para lograr esto se puede declarar patrimonialmente responsable a un particular, aunque no ejerza (o haya

ejercido) ningún tipo de manejo sobre bienes o fondos del Estado.

En otras palabras, la responsabilidad patrimonial puede y debe ser declarada, independientemente de la calidad de quien haya ocasionado la afectación, siempre que la lesión patrimonial al Estado y las responsabilidades de los involucrados esté plenamente acreditada, en el marco del principio de legalidad y el respeto a la garantía fundamental de debido proceso.⁶

Bibliografía

1. Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, Que desarrolla la Jurisdicción de Cuentas.
2. Constitución Política de la República de Panamá.
3. Código Judicial de la República de Panamá.
4. Ley 38 de 31 de julio de 2000, Que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración, regula el Procedimiento Administrativo General y dicta disposiciones especiales.
5. La Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, Por la cual se adopta la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
6. Fallo en Demanda Contencioso-Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare Nula, por ilegal, la Resolución de Cargos No. 27-2011 de 1 de noviembre de 2011, dictada por el Tribunal de Cuentas, el Acto Confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones. Ponente Abel Augusto Zamorano. Panamá, cinco (5) de julio de dos mil dieciséis (2016).
7. El Tribunal de Cuentas: Evolución, Fisonomía y Derecho Comparado. Autor: Oscar Vargas Velarde.

⁶ La garantía fundamental del Debido Proceso, está establecida por el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá.



FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS

FISCALÍA GENERAL
DE CUENTAS

GESTIÓN 2020

**Fiscalía General
de Cuentas**

República de Panamá
Recuperando el Patrimonio del
Estado



Ver Informe



Entrevista a la Fiscal General de Cuentas

[Ver Entrevista](#)



Glosario de Términos Jurídicos

- 1. Jurisdicción de Cuentas:** Se instituye para investigar y juzgar la responsabilidad patrimonial derivada de las supuestas irregularidades, contenidas en los reparos formulados por la Contraloría General de la República a las cuentas de los empleados y los agentes en el manejo de los fondos y los bienes públicos. (Art. 1 de la a Ley 67 de 14 de noviembre de 2008).
- 2. Empleado de Manejo:** Es todo servidor público que reciba, recaude, maneje, administre, invierta, custodie, cuide, controle, apruebe, autorice, pague o fiscalice fondos o bienes públicos. (Art. 2 de la a Ley 67 de 14 de noviembre de 2008).
- 3. Agente de Manejo:** Es toda persona natural o jurídica que reciba, recaude, maneje, administre, invierta, custodie, cuide, controle, apruebe, autorice o pague por cualquier causa fondos o bienes públicos. (Art. 2 de la a Ley 67 de 14 de noviembre de 2008).
- 4. Responsabilidad Patrimonial Directa:** Es la que recae sobre la persona que reciba, recaude, maneje, administre, cuide, custodie, controle, distribuya, invierta, apruebe, autorice, pague o fiscalice fondos o bienes públicos por razón de sus acciones u omisiones. (Art. 80 de la a Ley 67 de 14 de noviembre de 2008).
- 5. Responsabilidad Patrimonial Principal:** Es la que obliga, en primer lugar, a la persona que reciba, recaude, maneje, administre, cuide, custodie, controle, distribuya, invierta, apruebe, autorice, pague o fiscalice fondos o bienes públicos a resarcir la lesión patrimonial causada al Estado. (Art. 80 de la a Ley 67 de 14 de noviembre de 2008).



6. **Responsabilidad Patrimonial Solidaria:** Es aquella en virtud de la cual dos o más personas que reciban, recauden, manejen, administren, cuiden, custodien, controlen, distribuyan, inviertan, aprueben, autoricen, paguen o fiscalicen fondos o bienes públicos están obligadas solidariamente a resarcir la lesión patrimonial causada al Estado. (Art. 80 de la a Ley 67 de 14 de noviembre de 2008).
7. **Responsabilidad Patrimonial Subsidiaria:** Es aquella en virtud de la cual la persona que recibe, recaude, maneje, administre, cuide, custodie, controle, distribuya, invierta, autorice, apruebe, pague o fiscalice fondos o bienes públicos queda obligada a resarcir la lesión patrimonial causada al Estado por razón de que haya actuado con negligencia grave o haya permitido la lesión. (Art. 80 de la a Ley 67 de 14 de noviembre de 2008).
8. **Vista Fiscal elaborada por Fiscalía General de Cuentas:** Es la descripción clara y precisa de los hechos y de las circunstancias que dieron origen a la investigación de cuentas, con indicación de las fechas que comprende, la dependencia o el lugar en donde ocurrió y la infracción presuntamente cometida, y con la exposición y cuantificación concreta de la lesión patrimonial causada al Estado. (N.º 1 Art. 47 de la a Ley 67 de 14 de noviembre de 2008).
9. **Resolución de Cargo que decide causa del Tribunal de Cuentas:** Cuando implique la condena o declaratoria de la responsabilidad patrimonial del involucrado o de los involucrados. (N.º 1 Art. 72 de la a Ley 67 de 14 de noviembre de 2008).
10. **Resolución de Descargo que decide causa del Tribunal de Cuentas:** Cuando implique la absolución o inexistencia de la responsabilidad de los involucrados. (N.º 2 Art. 72 de la a Ley 67 de 14 de noviembre de 2008).

XII Aniversario de la Jurisdicción de Cuentas de la República de Panamá



Ver Conferencias



Allocución al XII Aniversario de la Jurisdicción de Cuentas

Doce años han transcurrido desde la entrada en vigencia de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, que desarrolla la Jurisdicción de Cuentas, tal como lo dispuso el artículo 99 que, indica que esta Ley comenzaría a regir desde el 15 de enero de 2009.

Si bien, la jurisdicción se desarrolló normativamente desde el alba de la República, este año se conmemora más de una década de esta emblemática instancia jurisdiccional, hoy con un Tribunal de Cuentas y una Fiscalía General de Cuentas, independientes y autónomos.

La génesis de la soberanía funcional, administrativa y presupuestaria, radica en lo dispuesto en el artículo 281 de la Constitución Política de la República de Panamá, tal como quedó reformado por el acto legislativo de 2004, que robusteció la institucionalidad del Estado panameño en esta materia, homologándonos a países vanguardistas como Suiza y Portugal, que les conceden estas vitales características a la jurisdicción que investiga y juzga la responsabilidad patrimonial derivada de las supuestas irregularidades en el manejo de los fondos y los bienes públicos.

Panamá ha dado un salto cuántico en esta jurisdicción, sin embargo, la normativa que rige la jurisdicción no es suficiente para ejercer un mandato constitucional con la eficiencia, eficacia, efectividad y la celeridad que demandan los ciudadanos que reclaman justicia patrimonial.

Ante esta carencia, resulta imperativo iniciar un proceso participativo, interinstitucional e interdisciplinario, para desarrollar una robusta codificación de cuentas, contentiva de normas sustantivas y procesales propias y autónomas, cónsonas con la especialidad de la materia objeto de esta jurisdicción, que incorpore la tecnología, la integración telemática entre las entidades intervinientes, la excelencia escolástica de sus operadores y consolidar un equipo donde converjan la sociedad y servidores públicos en esta batalla frontal contra la corrupción con miras a la recuperación del patrimonio del Estado de forma oportuna, equitativa y justa, como responsabilidad de todos los ciudadanos desde sus diferentes roles.

Es propicia la ocasión, para exaltar la labor realizada por todas las entidades públicas que coadyuvan con la Jurisdicción de Cuentas y exhortarles a mantener esta lucha sin tregua en el ejercicio y defensa de la función pública encomendada.

Enhorabuena por el duodécimo aniversario de la Jurisdicción de Cuentas.

Waleska R. Hormechea B.
Fiscal General de Cuentas

FISCALÍA GENERAL DE CUENTAS



**“EL CONOCIMIENTO ES LA MEJOR INVERSIÓN
QUE SE PUEDE HACER”**

ABRAHAM LINCOLN

CONTÁCTENOS

CENTRAL TELEFÓNICA:
(507) 506-2000



ifpa@fiscaliadecuentas.gob.pa
www.fiscaliadecuentas.gob.pa



Corregimiento de Bella Vista,
Calle Manuel Icaza, Edificio 8,
A un costado de la Notaría Duodécima de Panamá



www.facebook.com/fgcpanama
@FGC_panama
#fiscaliageneraldecuentas



WWW.FISCALIADECUENTAS.GOB.PA